

C.A. de Copiapó

Copiapó, veinte de octubre de dos mil veintidós.

VISTOS:

En esta causa RIT O-32-2021, caratulada “Aracena con CODELCO Chile”, por sentencia definitiva dictada con fecha veintisiete de julio de dos mil veintidós, rectificada el ocho de agosto del mismo año, por doña Diana Marín Castañeda, Jueza del Juzgado de Letras de Diego de Almagro, se resolvió rechazar las excepciones opuestas y acoger la demanda deducida por don Jorge Aracena Zepeda, en contra de la Corporación Nacional del Cobre de Chile-División Salvador, y se condenó a esta última a pagar la suma de \$103.861.142 (ciento tres millones ochocientos sesenta y un mil ciento cuarenta y dos), con reajustes e intereses legales desde la fecha de la ejecutoriedad del fallo hasta el pago efectivo, y se ordenó que cada parte pagará sus costas.

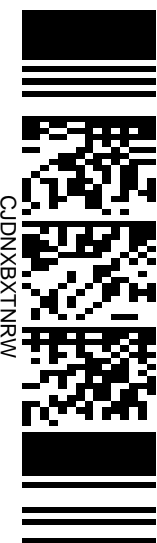
En contra de dicha sentencia, la parte demandada dedujo recurso de nulidad, fundado de manera principal, en la causal prevista en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en específico, por haberse dictado la sentencia con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 459 N°4 del mismo cuerpo legal.

En subsidio, en la causal contenida en el artículo 478 letra b) del Código Laboral, por haber sido pronunciada la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, por contravención al principio lógico de la razón suficiente.

En subsidio, en la misma causal anterior, ahora por contravención al principio de no contradicción.

Y en subsidio, en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Solicitó que se invalide la sentencia por cualquiera de las causales invocadas, una en subsidio de la otra, de forma que se dicte la sentencia de reemplazo en el sentido señalado en el recurso para cada causal. Respecto de la primera causal, peticionó el rechazo de la demanda por no haberse



determinado forma alguna para establecer la cuantía del daño, o bien en base a la metodología de cálculo que esta Corte determine, condene a Codelco a pagar la indemnización que estime pertinente, inferior a la ordenada en la sentencia recurrida. Por la segunda causal solicitó el rechazo de la demanda. En lo que concierne a la tercera causal, requirió que se determine que la indemnización que debe pagar Codelco sólo debe hacerlo desde la reevaluación de la enfermedad del actor, del 9 de febrero de 2021 en adelante. Y respecto a la última causal de invalidación, solicitó que se declare que se acoge la excepción de prescripción.

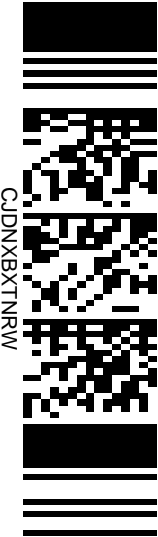
El recurso de nulidad fue declarado admisible, y se procedió a su vista el día 30 de septiembre de 2022, compareciendo a estrados don Sergio Montes Larraín, por el recurso, y don Juan Riesco Eyzaguirre, contra el recurso.

La causa quedó en estudio, pasando posteriormente a estado de acuerdo.

CONSIDERANDO:

Primero: Que antes de entrar al estudio del recurso interpuesto, debe tenerse presente que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de derecho estricto, al cual la ley ha rodeado de exigencias que deben ser cumplidas por la parte recurrente, sin dejar de considerarse, que se está atacando la validez de un fallo y no lo que pueda estimar quien recurre como su justicia. En otras palabras, no se trata solamente que la resolución del tribunal a quo no sea del agrado de la parte vencida, sino que en su pronunciamiento deben haberse obviado los requisitos que la ley impone.

Segundo: Que por otra parte, el recurso de nulidad contemplado en el proceso laboral, se sustenta en dos categorías de causales: la primera de ellas, de carácter genérico, consagrada en el artículo 477 del Código del Trabajo, consistente en infracción sustancial de derechos constitucionales o de ley que hubiese influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo; y la segunda, específica, prevista en las diferentes letras del artículo 478 del mismo texto legal, pudiendo invocarse distintas causales, conjunta o subsidiariamente, pero cada una de ellas fundamentada de manera concreta y coherente con el vicio denunciado.



I.- De la primera causal de nulidad interpuesta de manera principal: Artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación al artículo 459 del mismo cuerpo legal.

Tercero: Que la primera causal, deducida de manera principal, corresponde a la del artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, por haber sido dictada la sentencia recurrida con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 459 de dicho Código y, específicamente, el requisito señalado en su numeral 4, esto es, el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento que conduce a esta estimación, en relación a la cuantía a que fue condenada.

Se señala por quienes recurren, que no existe ni un solo análisis ni hecho que la sentencia estime probado, ni razonamiento alguno que permita determinar por qué la magistratura estimó que el monto condenado a pagar por lucro cesante asciende a la elevadísima suma de \$103.861.142. Agregan, preguntándose, porqué ese monto y no otro, así como, cuál fue el criterio o parámetro para llegar a dicha cantidad. La sentencia nada dice y en el considerando decimoquinto, en solo dos líneas se condena a dicho monto, sin dar explicación alguna de cómo se determinó, lo que es especialmente grave, si se considera que el monto que se obliga a pagar no coincide con el solicitado en la demanda, de forma que tampoco es posible concluir que el tribunal haga propia la metodología de cálculo que se contiene en el libelo.

Agrega que tanto es así, que la sentencia pasa de analizar la procedencia del lucro cesante, a la cuantía del mismo, sin razonamiento lógico de por medio que permita establecer que la pérdida de ganancia cierta futura concorra al monto señalado, lo que se puede apreciar en los considerandos decimotercero, decimocuarto y decimoquinto de la sentencia recurrida, que señalan:

“DECIMOTERCERO: Del lucro cesante. Que el actor pretende, asimismo, que se le indemnice el lucro cesante ocasionado por el retiro anticipado de sus labores en razón de la enfermedad profesional, toda vez que se ha visto truncada su capacidad de trabajo, privándole de la legítima ganancia producto de su trabajo, por la actuación negligente y culpable de la encartada. La larga trayectoria laboral y el lapso transcurrido entre el término



del contrato de trabajo y la declaración de incapacidad hacen presumir que, de no ser por su estado de salud, el demandante habría continuado prestando servicios para la demandada.

DECIMOCUARTO: Valoración de la prueba. Que el resto de la prueba rendida en estrados, pormenorizada en los considerandos pertinentes, mas no específicamente reseñada en lo decisorio, habiendo sido ponderada por este sentenciador, no ha producido el efecto de alterar las conclusiones a las que se ha llegado en los considerandos precedentes.

DECIMOQUINTO: Que, conforme lo que se ha venido diciendo permite establecer que dicho daño se verá resarcido con la suma de \$103.861.142”.

Afirma que a tal punto es efectivo lo que se viene señalando, que la propia parte demandante y favorecida con el fallo, solicitó al tribunal, una vez dictada la sentencia, que se aclarara cómo se había determinado el monto indemnizatorio, solicitud a la que el tribunal no accedió, pues se había ya producido el desasimiento del tribunal.

Adiciona que el propio Tribunal no sólo fijó como hecho a probar la pérdida de ganancia incurrida a causa de la enfermedad profesional, sino que también su monto, lo que se refleja en el punto 3 del auto de prueba que señala “3.- Efectividad que, como consecuencia de la enfermedad antes mencionada, el trabajador dejó de percibir ingresos que, de otro modo, se hubiesen incorporado a su patrimonio. Monto de los mismos”.

Manifiestan que la omisión que se denuncia incide sustancialmente en lo dispositivo del fallo,

toda vez que, de haberse analizado la prueba rendida en autos por ambas partes, se habría determinado que no existió daño, o bien que el monto de éste sería sustancialmente menor al condenado, agregando que, además, al no saber cuál fue el criterio fijado para determinar la cuantía, se impide que su parte pueda recurrir en contra de tal criterio en el evento de ser improcedente. Señala al efecto que no es lo mismo que el criterio considerado por la sentenciadora hubiese sido la simple proyección lineal de la última remuneración del actor multiplicada por el número de meses hasta cumplir 65 años o que, en consideración de la calidad de trabajador privado del demandante, este sólo podía tener como remuneración cierta el sueldo



mínimo de aquella época -\$162.000- multiplicada por el número de meses hasta cumplir 65 años.

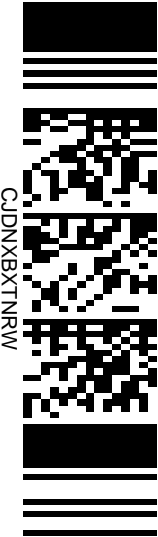
Indica, como ejemplo, una sentencia de la ltma. Corte de Apelaciones de Arica, causa Rol 276-2019, y en base a ella expresa que si se considera el criterio del lucro cesante cierto como el sueldo mínimo de la época, el monto es casi 10 veces más bajo que el de la última remuneración señalada por el demandante, ya que el tribunal tampoco determinó cual era la última remuneración, y a ello o a cualquier criterio que establezca esta Corte, además deberá descontarse el 45% del monto calculado por el hecho de ser un hecho cierto que el trabajador demandante tenía aquel porcentaje apto para obtener ganancia.

II.- Análisis de la primera causal de nulidad (principal).

Cuarto: Que esta primera causal anulatoria, contenida en el artículo 478 del Código Laboral, contempla como motivo de nulidad, la circunstancia de haber sido dictada la sentencia con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 459, 495 o 501 inciso final del mentado Código, según corresponda, y en este caso, tratándose de un procedimiento laboral de aplicación general, debe prestarse atención al artículo 459 del Código del ramo, norma invocada por el recurrente, que en su numeral 4, exige expresamente que la magistratura efectúe un análisis de toda la prueba rendida y reproduzca el razonamiento en base al cual da por establecidos los hechos a los cuales habrá de aplicar la correspondiente calificación jurídica.

La norma en cuestión no hace sino consagrar una de las garantías que configuran el debido proceso, como es la fundamentación de las resoluciones judiciales, la que recorre transversalmente nuestro ordenamiento jurídico, contemplándose por el legislador en diversos procedimientos, por ejemplo, el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, las normas del Auto Acordado dictado por la Excm. Corte Suprema con fecha 30 de septiembre de 1920 “Sobre la forma de las sentencias”, los artículos 36 y 342 del Código Procesal Penal, y el artículo 66 de la Ley N° 19.968.

Quinto: Que en este entendido, la sentencia debe contener una relación de los hechos cuestionados, con expresión precisa de aquellos que fueron establecidos en el proceso y mencionando los medios de prueba en



virtud de los cuales se les tuvo por acreditados. A partir de ello la magistratura debe reproducir en la resolución su razonamiento, ajustado a los parámetros del sistema de valoración de la prueba que lo determinen, a fin que cualquier persona que tenga frente a sí la sentencia se encuentra en posición de comprender el camino que recorrió el tribunal para llegar a la decisión del conflicto dando lugar o rechazando la demanda interpuesta.

Lo anterior, excluye la vieja práctica de efectuar una relación formal de los antecedentes, sin detenerse en su análisis. La fundamentación de la sentencia compromete la responsabilidad de la judicatura, quien cumple un rol social trascendental, puesto que sus resoluciones dan una señal clara a la sociedad respecto a la ponderación de los distintos bienes jurídicos y, a la vez, permite a la sociedad controlar la actividad judicial, expresada en su razonamiento, no sólo formal sino que sustancial. Esta forma de entender lo que implica la fundamentación de la sentencia se conoce como principio socializador y refleja una de las facetas de la responsabilidad del Estado en el ejercicio de la Soberanía.

Sexto: Que sobre la materia, Cerda San Martín ha señalado que: “... *la fundamentación y motivación de las decisiones judiciales relevantes, especialmente de la sentencia definitiva, además de constituir una garantía del derecho a un debido proceso, es un aporte de racionalidad en el proceso intelectual de valoración de la prueba, de interpretación jurídica de las normas y de aplicación de las mismas al caso concreto, alejando el arbitrio o la mera subjetividad.*

Las personas tienen derecho a conocer las razones de las decisiones judiciales, y el enlace de ellas con la ley y el sistema de fuentes del derecho aplicable. Además, en su desarrollo implica también el derecho a una sentencia razonable y congruente. No será razonable una decisión que contiene contradicciones internas o errores lógicos, y será incongruente cuando implica un pronunciamiento sobre temas o materias no debatidas en el proceso, sobre las cuales no se ha producido la necesaria contradicción entre las partes...” (Rodrigo Cerda San Martín. Valoración de la prueba. Sana crítica. página 107).



El mismo autor recién citado señala que: *“(...) lo importante es explicitar de un modo claro y preciso los hechos y la forma como fueron ellos establecidos, pues solo de esa manera los litigantes estarán en condiciones de analizar la decisión a la luz de los parámetros de racionalidad.*

Algunos hechos serán directamente fijados por los elementos de prueba, fenómeno que se dará, por ejemplo, ante una conclusión emitida por peritos y que corresponde a conocimientos científicamente afianzados o frente a una prueba testimonial ocular, creíble y veraz. En tanto otros enunciados deberán ser concluidos a través de un razonamiento inductivo, bajo las reglas de la lógica formal y las máximas de la experiencia” (Rodrigo Cerda San Martín. Valoración de la prueba. Sana crítica. página 122).

Y más adelante agrega: *“(...) Que la mera transcripción de los elementos de justificación rendidos en el juicio, muchas veces excesiva e innecesaria, no es suficiente para entender cumplido el estándar legal, es preciso dejar plasmado en el fallo cómo fueron percibidos tales antecedentes, la opción de credibilidad que se ejerció respecto de ellos y la apreciación conjunta de los mismos para determinar su verosimilitud, señalando específicamente por que se prefieren unos respecto de otros”* (Rodrigo Cerda San Martín. Valoración de la prueba. Sana crítica. Página 123).

Séptimo: Que también Astudillo Contreras ha tratado el tema, refiriendo que: *“De acuerdo con el imperativo legal (artículo 459 N° 4 del Código del Trabajo, en relación a su artículo 456), la motivación fáctica de las sentencias definitivas debe estar compuesta por tres grandes elementos que, secuencialmente ordenados, son los que siguen:*

- a) el análisis de toda la prueba rendida, que supone un examen integral de ellas y la necesidad de expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en virtud de las cuales el juez asigna valor o desestima el valor probatorio, de las probanzas deducidas;*
- b) el razonamiento que conduce a estimar como probados los hechos, y*
- c) la consignación explícita de los hechos que se ha estimado probados.*

Como se está en presencia de una exigencia de procedimiento, relacionada con la manera en que debe expedirse el acto procesal, su falta de acatamiento comporta un error in procedendo. Por lo tanto, aunque se refiera



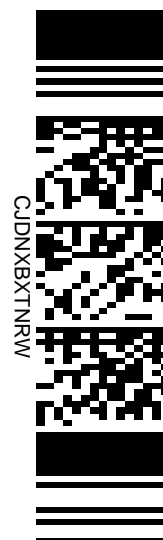
al juicio de hecho, la mirada crítica a realizar, tanto por el litigante como por el tribunal de nulidad, tendría que hacerse en función del cumplimiento del mandato legal y bajo un tamiz preponderantemente estructural, de forma, antes que de contenido”.

A lo que agrega que: “(...) el control de legalidad, que puede derivar en la invalidación de la sentencia, debería llevarse a cabo ante la falta de fundamentación (total o parcial) y ante la fundamentación defectuosa, todas las cuales corresponderían a la expresión de un mismo vicio: el previsto como causal de nulidad en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, por omisión de la exigencia que contempla el mencionado numeral 4 de su artículo 459” (El Recurso de Nulidad Laboral. Omar Astudillo Contreras. Thomson Reuters. 2012. páginas 153 y 154).

Octavo: Que finalmente, resulta del caso dar cuenta de lo sostenido por la ltima. Corte de Apelaciones de Concepción, en autos sobre recurso de nulidad laboral, Rol 636-2018, en cuanto refiere que: *“Como ya se ha resuelto reiteradamente, valorar la prueba implica efectuar un análisis de cada uno de los antecedentes probatorios, enunciando con claridad cuáles son las circunstancias que emanan de ellos y las razones que puedan existir para tener por acreditados o no los hechos sobre los que versan”.*

Noveno: Que, dicho lo anterior, habiéndose revisado la sentencia impugnada, a la luz de la causal invocada, aparece que efectivamente no se cumple con el imperativo legal de analizar la prueba rendida en el proceso y de exponer los razonamientos relacionados con la forma en que el tribunal determinó el monto que por concepto de lucro cesante debe pagar la parte demandada al actor, y que fue fijado en \$103.861.142.

En efecto, se advierte que la sentenciadora a quo, en el considerando tercero señala cuáles fueron los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Luego en el motivo cuarto detalla la prueba rendida por la parte demandante –documental, testimonial, exhibición de documentos, y oficios-. En el motivo quinto, hace lo propio con la prueba de la parte demandada –documental, confesional, exhibición de documentos y oficios-. En el motivo sexto expresa que la excepción de litis pendencia se resolvió en la audiencia preparatoria, y se pronuncia sobre la excepción de prescripción,

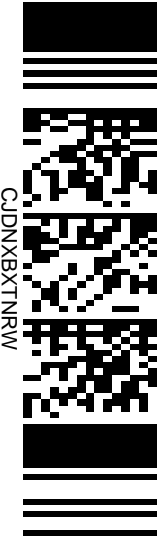


la que rechaza, y sobre la excepción de finiquito, que también desestima. En el considerando séptimo expresa cuál es el núcleo de la litis, afirmando que corresponde determinar si la enfermedad profesional de silicosis, que padece el actor, tuvo su origen en el incumplimiento culpable de obligaciones de la demandada, y en especial de su obligación de seguridad contemplada en el artículo 184 del Trabajo, y que en consecuencia se disponga el resarcimiento de los perjuicios causados por los rubros de lucro cesante, para luego hacer referencia al deber de seguridad del empleador. Desde el motivo octavo al undécimo, analiza la responsabilidad del empleador, concluyendo que existe una relación de causalidad entre la conducta culpable de la empresa y la enfermedad que aqueja al actor.

En este punto, la sentencia afirma en el motivo duodécimo que el empleador debe hacerse cargo de la indemnización por lucro cesante por la enfermedad profesional de silicosis pulmonar del actor, para luego en el motivo decimotercero señalar que la larga trayectoria laboral y el lapso transcurrido entre el término del contrato de trabajo y la declaración de incapacidad hacen presumir que, de no ser por su estado de salud, el demandante habría continuado prestando servicios para la demandada. Ya hacia el final, en el motivo decimocuarto refiere sobre el resto de la prueba, que no altera las conclusiones, y en el motivo décimo quinto, literalmente en dos líneas, determina un monto de indemnización por lucro cesante en la suma de \$103.861.142.

Décimo: Que resulta evidente que la sentenciadora del grado no realizó ningún análisis sobre la prueba rendida que permita entender las razones que la llevaron a concluir el monto que en definitiva ordenó pagar a la parte demandada por concepto de lucro cesante.

De tal modo, a la luz de la garantía de fundamentación, la sentencia en análisis no satisface el parámetro referido, en la medida que, como se ha venido diciendo, se limita a reseñar cada uno de los medios de prueba, establecer la responsabilidad de la empresa demandada en relación a la enfermedad que aqueja al actor, y a partir de ello sostener la procedencia de la indemnización por lucro cesante, pero sin analizar los elementos



probatorios que llevaron a la magistrada a determinar su monto, lo que contraría la obligación constitucional de fundamentación de las sentencias.

Undécimo: Que no obstante todo lo que se ha asentado precedentemente, extensamente por la relevancia de la materia, acontece que el vicio en que se ha incurrido no influye en lo dispositivo del fallo, en la medida que la suma de dinero a la cual fue condenada la parte demandada resulta acorde al mérito de los antecedentes, como se pasará a explicar.

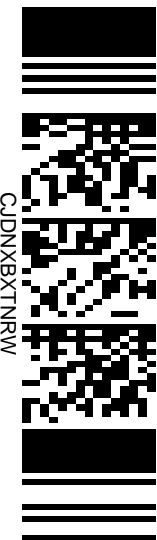
Duodécimo: Que la Excma. Corte Suprema ha unificado la materia en estudio, sosteniendo de manera reiterada que *“de conformidad con lo que dispone el artículo 1556 del Código Civil, la indemnización de perjuicios comprende el lucro cesante cuando no se ha cumplido con la obligación, como sucede en la especie con la responsabilidad contractual del empleador. El lucro cesante es la pérdida de ingresos que se sigue del daño corporal y “el objeto de la reparación es la expectativa objetiva de ingresos futuros que la persona lesionada tenía al momento del accidente y la indemnización debe comprender los ingresos netos que la víctima deja de percibir y su determinación se efectúa en concreto, atendiendo a las calidades de la víctima (incluidas su edad y su estado de salud). Así y todo, esta determinación supone asumir lo que habría de ocurrir en el futuro de no haber ocurrido el accidente, lo que exige una mirada objetiva hacia el curso ordinario de los acontecimientos (Barros, ob. citada, página 277)”* (Corte Suprema, sentencias de unificación de jurisprudencia laboral Roles N° 2547-2014, N° 2761-2017, N° 3975-2017 y N° 2766-2020).

Décimo tercero: Que asimismo, el Máximo Tribunal ha señalado que el lucro cesante no requiere una pérdida de una ganancia cierta, sino una meramente probable o hipotética, agregando que *“El lucro cesante o lucrum cessans, a diferencia del daño emergente no es una pérdida real y efectiva, sino una proyección de un beneficio o ganancia legítima que le hubiera significado al acreedor la ejecución correcta del contrato, es decir, el cumplimiento íntegro y oportuno del deudor. En efecto, ya que el lucro cesante puede representarse por la pérdida o privación de los ingresos, beneficios o utilidades que sufre una persona como consecuencia del incumplimiento, constituye un daño futuro, aunque cierto, y por ello reparable,*



siempre que existan elementos objetivos que sirvan para proyectar en el tiempo, razonablemente, la certeza de ese ingreso, beneficio o utilidad perdido. Dicho de otro modo, la determinación de la extensión de la reparación de este tipo de daño pasa por un ejercicio de prolongación cierta y directa de cosas existente al momento del incumplimiento como si hubiera ello objetivamente podido ser medido en ese momento siguiendo un curso normal u ordinario de las cosas. En el caso de autos, la sentencia de mérito dio por acreditado que el accidente de trabajo produjo al actor una merma física de carácter permanente, cuya consecuencia se proyectará por todo el resto de su vida laboral, lo que, a las luz de la normativa pertinente y de los razonamientos previamente vertidos, supone que resulten correctas tanto la declaración de existencia del daño como el método empleado para su determinación, al proyectar el porcentaje de dicha merma a las remuneraciones que podría obtener hasta cumplir la edad que le permitirá acceder a una pensión de vejez” (Corte Suprema, sentencia de unificación de jurisprudencia laboral Rol N° 2766-2020).

Décimo cuarto: Que sobre la base de lo expresado precedentemente, para determinar la pérdida del trabajador, en este caso, se debe partir de la base que quedó asentado en el proceso que el actor prestó servicios para la demandada desde el 25 de junio de 1981 y hasta el 31 de julio de 2009, desempeñando diversas labores, entre ellas, jornalero, soldador, cortador, motorista, minero, reparador y operador. Por otra parte, con la Resolución N° 211, de la COMPIN de Atacama, de 9 de febrero de 2021, se acreditó que al trabajador le afecta un 50% de incapacidad laboral por concepto de silicosis pulmonar, y un 5% de incapacidad laboral por hipoacusia neurosensorial por trauma acústico crónico, con una ponderación de 5,5%, resultando un total de discapacidad del 60,5%. En tanto, del documento denominado anexo de detalle de finiquito, incorporado al juicio, específicamente del monto pagado por concepto de indemnización de años de servicios - \$35.454.300- y el número de años que prestó servicios -28 años-, se puede establecer que al momento de la separación, el trabajador mantenía una remuneración promedio ascendente a la suma de \$1.226.225. Y del certificado de nacimiento incorporado, consta que el actor, don Jorge Aravena



Zepeda nació el 10 de mayo de 1957, por lo que al año 2009, época de la separación de las labores, tenía la edad de 52 años.

Décimo quinto: Que de tal modo, considerando la remuneración que percibía al actor al momento de término de la relación laboral -\$1.226.225-, su edad -52 años-, y la incapacidad laboral que lo aqueja hasta la actualidad, corresponde determinar una merma mensual en sus ingresos ascendente al 55% de la última remuneración promedio, suma que ha de multiplicarse por el número razonable de meses que le restaban para desarrollar las labores que durante prácticamente toda su vida ejecutó para la demandada, y que, de no mediar la enfermedad profesional, habría seguido prestando previsiblemente para la misma. Y estimándose que dicho periodo corresponde a un total de 12 años y 10 meses, es decir, 154 meses, época en que el actor alcanzaría su edad de jubilación, se llega a una merma total de \$103.861.142, suma por la cual precisamente se acogió la demanda de indemnización por lucro cesante.

Décimo sexto: Que conforme a lo razonado precedentemente, advirtiéndose que el vicio constatado no ha influido en lo dispositivo de la sentencia, esta primera causal será rechazada.

III.- De la segunda causal de nulidad interpuesta de subsidiaria: Artículo 478 letra b) del Código del Trabajo. Principio lógico de la razón suficiente.

Décimo séptimo: Que se alega por quienes recurren que la sentencia fue pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, al dictarse la sentencia quebrantando las reglas de la lógica, especialmente, el principio de razón suficiente.

Refieren que las conclusiones arribadas por el Tribunal para determinar que el demandante sufrió efectivamente lucro cesante, se encuentran en el motivo décimo tercero del fallo reclamado, el que reproducen, y que señala lo siguiente: *“DÉCIMOTERCERO: Del lucro cesante. Que el actor pretende, asimismo, que se le indemnice el lucro cesante ocasionado por el retiro anticipado de sus labores en razón de la enfermedad profesional, toda vez que se ha visto truncada su capacidad de trabajo, privándole de la legítima ganancia producto de su trabajo, por la actuación negligente y culpable de la*



encartada. La larga trayectoria laboral y el lapso transcurrido entre el término del contrato de trabajo y la declaración de incapacidad hacen presumir que, de no ser por su estado de salud, el demandante habría continuado prestando servicios para la demandada”.

Indican que el intento lógico de la sentencia para fundamentar el lucro cesante se basa en presumir la existencia de lucro cesante a partir de ciertos indicios, a saber, (i) la larga trayectoria laboral; y (ii) el lapso transcurrido entre el término del contrato de trabajo y la declaración de incapacidad; lo que constituye un “salto al vacío”, ya que no se puede concluir con sólo aquellos indicios que el demandante no consiguió trabajo a causa de la enfermedad profesional. Concretamente, refieren, la trayectoria laboral del trabajador y el tiempo transcurrido entre el término de contrato y la declaración de incapacidad no son hechos que, por sí solos, permitan concluir la existencia de lucro cesante.

De tal modo, afirman, se está ante la falacia argumentativa de la falsa causa, la que ocurre cuando a un hecho se le atribuye una única causa, en circunstancias que puede tener varias y excluyentes entre sí, lo que se traduce en una simplificación, cuando en realidad la situación puede ser mucho más compleja. En el caso concreto, de ninguno los dos hechos en los que la sentencia sostiene su conclusión, es posible inferir la existencia de lucro cesante o una pérdida de ganancia por parte del actor. En primer lugar, la trayectoria del trabajador no permite en modo alguno concluir que, a su salida a Codelco, obtendría otro trabajo. No existe un vínculo real entre la supuesta causa y la conclusión. O dicho de otra forma, la supuesta causa no se basta a sí misma para llegar a dicha conclusión, porque al menos requiere de otras causas para ello. Por su parte, el hecho de que el trabajador haya dejado de prestar servicios a Codelco en julio de 2009, y la enfermedad que sirve de base para la sentencia sea del año 2021, no permite explicar ni justificar -de modo alguno- que no haya podido conseguir trabajo en el interín. Muy por el contrario, hasta antes de 2021 su diagnóstico era más leve y por ende, menos perjudicial para efectos de la búsqueda de trabajo, que a partir del 2021.



En síntesis, sostienen que de las causas usadas por el tribunal (A+B), no es posible, por sí solas o conjuntamente, alcanzar la conclusión del tribunal (C). Así, si $a + b$ no es igual a C, al construir dicho silogismo se está vulnerando el principio de la razón suficiente, en virtud del cual todas las conclusiones de la sentencia tienen que estar respaldadas en hechos asentados en el juicio que permitan, mediante el razonamiento lógico, arribar a dicha conclusión.

Refieren más adelante doctrina sobre la materia, y agregan que al eliminarse la conclusión del tribunal expresada en el referido motivo décimo tercero, no se puede tener por acreditado que existió el daño y, por ende, la demanda debe ser rechazada.

Finalizan sus alegaciones respecto de esta causal, señalando que es evidente que la infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto de haberse apreciado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, se habría concluido que el demandante no cumplía los requisitos para ser indemnizado por lucro cesante pues no se acreditó la pérdida de una efectiva ganancia total y tampoco ésta era presumible, por lo que se debió rechazar la demanda.

IV. Análisis de la segunda causal de nulidad (subsidiaria).

Décimo octavo: Que respecto de esta causal de invalidación del artículo 478 letra b) del Código Laboral, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde dejar asentado que el artículo 456 del Código del Trabajo prescribe:

“El tribunal apreciará la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Al hacerlo, el tribunal deberá expresar las razones jurídicas y las simplemente lógicas, científicas, técnicas o de experiencia, en cuya virtud les asigne valor o las desestime. En general, tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador”.

Luego, el precepto transcrito permite concluir que las reglas de la sana crítica reclaman dos cosas al juzgador o juzgadora:

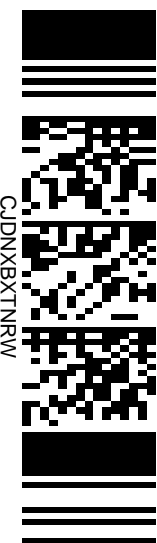


En primer lugar, el respeto de los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos y técnicos afianzados. En este sentido, el autor Cristian Contreras expresa que: *“...el sistema se encuentra construido sobre el reconocimiento expreso de ciertas barreras limitantes al desborde de las atribuciones del sentenciador, las que clásicamente son el respeto de las reglas básicas impuestas por la lógica y las máximas de la experiencia, a las que los sistemas procesales chilenos del siglo XXI han agregado la observancia de los conocimientos científicamente afianzados...”* (Contreras Rojas, Cristian, El recurso de nulidad laboral como herramienta de control de las exigencias impuestas por la sana crítica a propósito de la sentencia rol 1068-2010 de la Corte de Apelaciones de Santiago, en Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, año 18, número 1, 2011, página 271).

En segundo lugar, se exige del juzgador o de la juzgadora, la expresión de las razones que han conducido a asignar valor o a desestimar las pruebas rendidas, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que genera el convencimiento. Al respecto, don Enrique Barros explica que: *“...la apreciación de conformidad con la sana crítica exige del juez la explicación de las circunstancias concretas que le permiten llegar al convencimiento en la determinación de los hechos...”* (Barros Bourié, Enrique, Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2006, página 714). Esta segunda exigencia implica, necesariamente, que previamente el juzgador o la juzgadora señalen las pruebas relacionadas con la acreditación de los hechos debatidos.

En consecuencia, sólo si la sentencia transgrede los principios de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicos o técnicos afianzados, o si carece de las razones que le conduzcan a asignar valor a unas pruebas y a desestimar otras de modo que su razonamiento no conduce naturalmente a la decisión adoptada, será posible acoger la nulidad solicitada.

Este es el modo acertado de entender el recurso de nulidad laboral, pues no sólo evita que, en un extremo, esta Corte valore la prueba rendida transformando aquella vía de impugnación en un recurso de apelación como



CJDNXBXTNRW

el de antaño, sino también que, en el otro extremo, la causal del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo carezca de aplicación práctica.

Décimo noveno: Que específicamente en lo referente al principio de la razón suficiente, la doctrina refiere que *“el axioma fue expresado por Leibniz en 1714 y desarrollado por Shopenhauer en 1813 en los siguientes términos: “Ninguna enunciación puede ser verdadera sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo.*

También se ha señalado que el enunciado de este principio es “todo aquello que posee existencia o puede existir, posee una razón suficiente para existir”. Dice relación, entonces, con la razón teorizante que busca fundamentar el conocimiento (criterio formal de fundamentación)” (Rodrigo Cerda San Martín. Valoración de la Prueba. Sana crítica. Editorial Librotecnia. Primera Edición. Año 2008. Página 47).

En idénticos términos, se ha expresado que *“el principio de la razón suficiente sostiene que todo hecho que ocurre tiene alguna razón, causa o motivo que lleva a su despliegue o verificación. En el ámbito procesal el principio de la razón suficiente significa que el juez debe expresar en la valoración probatoria su ratio decidendi. Del mismo modo que los litigantes deben fundar sus pretensiones y aportar sus medios de prueba (principio de aportación de parte) el de tribunal debe expresar las razones por lo que da crédito a determinados medios de prueba y tiene por probados unos hechos y otros por no probados (deber de motivar la resolución judicial)”* (Diego Palomo Vélez. Proceso Laboral. Editorial Thomson Reuters. Primera Edición. Año 2021. Página 259).

A su vez, la jurisprudencia en relación a este principio, ha manifestado *“que, adicionalmente, como se ha visto, el recurrente ha sostenido que se ha vulnerado el principio de la razón suficiente. De acuerdo con dicho principio, “todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique”. Lo que es, es por alguna razón, “nada existe sin una causa o razón determinante”, dado que según Wilhelm Leibniz –quien lo planteó– nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios: el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso, y el de razón suficiente, en virtud del cual*



consideramos que no puede hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Así el principio de razón suficiente nos da respuesta a una exigencia natural de nuestra razón, según la cual nada puede ser nada más “porque sí”, pues todo obedece a una razón” (Corte de Apelaciones de Antofagasta, sentencia Rol N° 119-2018).

Vigésimo: Que se cuestiona por los recurrentes la circunstancia de no encontrarse debidamente justificada en la sentencia que se revisa, la existencia del lucro cesante que reclama el actor. Sin embargo, si bien la argumentación del Tribunal a quo puede considerarse escueta, lo cierto es que apunta correctamente a aspectos que deben ser considerados para determinar la existencia del lucro cesante que el empleador debe pagar al actor, al haber faltado a su deber de protección, lo que se une, a todos los fundamentos ya expresados en los considerandos décimo segundo a décimo quinto de esta sentencia.

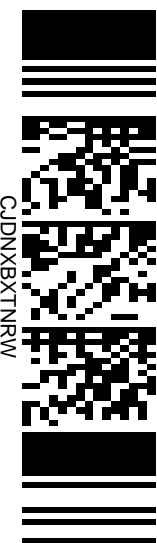
Vigésimo primero: Que así las cosas, fluye la procedencia, en este caso, del lucro cesante que se ha demandado, debiendo observarse que, como sea, la infracción que se alega, en caso alguno podría influir en lo dispositivo del fallo, ya que el razonamiento del tribunal aparece respaldado por los argumentos vertidos por esta Corte en el presente fallo, como se señaló en el párrafo precedente.

Vigésimo segundo: Que conforme a lo razonado precedentemente, esta segunda causal de invalidación será igualmente rechazada.

V.- De la tercera causal de nulidad interpuesta de subsidiaria: Artículo 478 letra b) del Código del Trabajo. Principio lógico de no contradicción.

Vigésimo tercero: Que, en subsidio, se alega la causal de nulidad del artículo 478 literal b) del Código del Trabajo, al dictarse la sentencia quebrantando la regla de la lógica, específicamente, el principio de no contradicción.

Señalan los recurrentes que no puede la sentenciadora considerar, al mismo tiempo, que para efectos de desechar la excepción de prescripción que opuso su parte, el diagnóstico de enfermedad profesional es aquel que



corresponde al año 2021, pero a la vez, entender que el perjuicio supuestamente sufrido por el actor debe indemnizarse desde que dejó de prestar servicios para Codelco el año 2009, en virtud de su enfermedad de silicosis previamente diagnosticada.

Agregan que, como también se explica en la siguiente causal de nulidad, una de las controversias planteadas en el juicio dice relación con la fecha de diagnóstico de la enfermedad de silicosis, para efectos de determinar desde cuándo debía contabilizarse el plazo de la prescripción que alegó su parte, entendiendo que este último se contabiliza desde el “diagnóstico de la enfermedad” -siguiendo la tesis de prescripción de la acción conforme a las reglas del artículo 79 de la Ley N° 16.744, que es a la que adhirió la sentencia-.

En concreto, refieren, existían dos tesis sobre esta materia: que el diagnóstico de la enfermedad es la primera vez que se detectó que el actor padecía de silicosis, el año 2001, o bien que el diagnóstico corresponde a la reevaluación por la que se aumentó el porcentaje de pérdida de ganancia del actor, del año 2021, decantando la sentencia por la segunda tesis para efectos de contabilizar el plazo de prescripción. Ese sería, por lo tanto, el diagnóstico de la enfermedad, de acuerdo a la sentenciadora.

Sin embargo, manifiestan los recurrentes, para efectos de determinar la cuantía del lucro cesante que se ordena pagar, el tribunal considera que el diagnóstico es el del año 2009. Lo anterior, ya que considerando la cuantía que se ordena pagar, la sentencia no pudo sino considerar el supuesto daño del actor desde que dejó de prestar servicios a Codelco, el año 2009, y no desde el año 2021.

Añaden que ni siquiera siguiendo los métodos de cálculo de la demanda se alcanza el monto ordenado pagar, si se considera solo desde el año 2021 en adelante. En otras palabras, para un mismo concepto (diagnóstico de la enfermedad) se utilizan dos fechas distintas, distantes 20 años entre sí, vulnerándose el principio de no contradicción.

Manifiestan que las cosas no pueden ser y no ser a la misma vez. Por ello, si el Tribunal determinó que la última resolución de incapacidad



constituye el diagnóstico a partir del cual se contaría la prescripción, no puede, al mismo tiempo, cuantificar el daño desde antes de la ocurrencia de dicho diagnóstico. De otra manera, se estaría considerando una fecha de diagnóstico para efectos de la prescripción, y otra distinta para efectos de determinar la cuantía del daño.

Refieren que el principio de la no contradicción fuerza a escoger una misma fecha de diagnóstico para todos los efectos legales, pues no es posible que, para un efecto, se entienda que el diagnóstico es el del año 2021, pero para otros, se entienda que es el del año 2001, resultando evidente que esta infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, por cuanto de haberse apreciado la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, se habría concluido que, en base a la fecha de diagnóstico de la enfermedad determinada por la propia sentencia para efectos de resolver la excepción de prescripción, solo correspondería indemnizar los perjuicios supuestamente sufridos por el actor desde la fecha de dicho diagnóstico, esto es, desde el 9 de febrero de 2021, y no desde el año 2009, como lo hace la sentencia.

Solicitan para esta causal, que acogiénola, se invalide la sentencia definitiva de forma que se dicte la sentencia de reemplazo determinando la indemnización que debe pagar su representada solo desde la reevaluación de su enfermedad del 9 de febrero de 2021, en adelante.

VI. Análisis de la tercera causal de nulidad (subsidiaria).

Vigésimo cuarto: Que entorno a la presente causal es pertinente tener en consideración todo lo referido en los motivos décimo segundo a décimo quinto de la presente sentencia. Además de ello, se debe recordar que en lo que respecta al principio de no contradicción, la doctrina ha sostenido que *“según Manuel Luján Túpez este enunciado proviene de la escolástica temprana donde se planteaba que “todo aquello que es, en cuanto tal, no puede no-ser”, con lo cual se establece una relación ontológica que aumenta el grado de comprensión en la definición del ser.*

Cuando el juez motiva sus resoluciones debe hacerlo coherentemente. Todos los argumentos que sustenten la sentencia deben ser compatibles entre sí. No se puede afirmar y negar, a la vez, un hecho de una cosa o un mismo sujeto, pues los argumentos contradictorios se excluyen mutuamente,



siendo imposible sacar una conclusión válida de ellos. Este es el sustrato del principio lógico de no contradicción, el cual se formula diciendo que es imposible que una cosa o un sujeto sea X y no X al mismo tiempo, bajo la misma relación. Si afirmo algo de una cosa o de un sujeto, no puedo negarlo a la vez, porque cualquiera de los dos enunciados sería falso y, por ende, falsa la conclusión” (Rodrigo Cerda San Martín. Valoración de la Prueba. Sana Crítica. Editorial Librotecnia. Primera Edición. Agosto 2008. Páginas 44 y 45).

En similar sentido, la jurisprudencia ha expresado que *“el principio de la no contradicción se hace radicar principalmente en que la proposición y su negativa no pueden ser, al mismo tiempo, verdaderas, en el mismo sentido. El principio de la no contradicción permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción entre ambos razonamientos, que el recurrente hace radicar en la confrontación entre el valor de las pruebas incorporadas por su parte con las conclusiones a las que arriba el juez, esto es, se trata de un cuestionamiento al valor de los antecedentes probatorios y a las conclusiones a las que arriba el sentenciador”* (Ilustrísima Corte de Apelaciones de Talca, sentencia de fecha 3 de junio de 2016, Rol N° 69-2016).

Vigésimo quinto: Que conforme a lo anteriormente expuesto, en concepto de esta Corte, las alegaciones de quienes recurren escapan al contenido de la causal. En efecto, lo que se reprocha en el recurso es que la magistratura haya considerado el diagnóstico del año 2021 del actor, de enfermedad profesional, para rechazar la excepción de prescripción, y a su vez haya entendido que el perjuicio sufrido por aquél debe indemnizarse desde que dejó de prestar servicios para Codelco en el año 2009. Sin embargo, ambos razonamientos expresados en la sentencia recurrida no son contradictorios, sino que apuntan a materias con decisiones independientes. Luego, no se trata que la jueza a quo afirme que se debe considerar el diagnóstico inicial del 2021 para los efectos de resolver la excepción de prescripción, y luego lo niegue, o bien que lo mismo acontezca con la fecha que marca el inicio de los perjuicios del actor. Eso no ocurre en la sentencia. En cambio, lo que acontece es que la sentenciadora resuelve primeramente sobre la excepción de prescripción, haciendo un correcto análisis de los



antecedentes para su rechazo, y posteriormente vuelva su análisis hacia la procedencia del lucro cesante, el que, como además ya se revisó en las causales anteriores, procede desde la fecha de la separación de funciones, lo que ocurrió en el año 2009.

Vigésimo sexto: Que en todo caso, esta materia fue estudiada por la Excma. Corte Suprema, quien señaló que: *“... ¿Es legítimo para un trabajador que conoce su diagnóstico de enfermedad profesional con leve incapacidad, posponer o renunciar temporalmente al ejercicio de la acción indemnizatoria contra el empleador al que considera responsable del menoscabo? Como se advertirá, la respuesta negativa conlleva el inicio del cómputo del plazo de prescripción de la acción correspondiente, desde dicho noticiamiento.*

Los análisis que anteceden son ilustrativos en cuanto a la abierta posibilidad y previsibilidad de un resultado adverso de los empeños de sanación del padecimiento, lo que se sabrá en la medida que nuevos controles vayan mostrando su estancamiento, cuando no su progresión.

Cada una de esas experiencias constituye un episodio, esto es, un momento en la realidad del sujeto que puede o no engendrar el interés jurídico de perseguir las compensaciones a las que podría llegar a parecerle tiene derecho.

El fundamento inmediato del derecho deducido en juicio será, pues, el evento que precisa y determinadamente ha dado lugar a la activación del tribunal competente.

En otros términos, nada impide que el empleado que en determinado tiempo sabe le afecta una enfermedad calificada como profesional y que ello lo incapacita en un porcentaje que califica como menor, no traduzca esa limitación en un anhelo jurisdiccional, sea en la esperanza de obtener la mejoría en la que se propone empeñarse, sea en resguardo de una fuente laboral que teme perder como consecuencia de demandar de perjuicios a su patrón.

En ese mismo dependiente, enterado, ahora, del progreso de su dolencia y consciente de la inhabilidad agravada que presentemente se le diagnostica, puede surgir el propósito reivindicador.

La causa de pedir de la acción consiguiente no será, por cierto, lo otrora acontecido, sino el episodio contemporáneo en el que se enquistó la congoja de la desesperanza de una recuperación.

En la perspectiva de la teoría de la acción, ninguna duda podría caber en punto a que, siendo la causa de pedir la de la grave deficiencia recién diagnosticada, a partir de ella nace la exigibilidad que en esta resolución procura determinarse.

Si se quiere -de acuerdo con lo explicado en supra 7°- hay dos o más enfermedades. Una, la del diagnóstico inicial. Otra, la del terminal, cuando no la de algunos intermedios; a cada una su acción, con su propia exigibilidad;" (Corte Suprema, sentencia de unificación de jurisprudencia laboral, considerando 12° en autos Rol 2661-2015).

Vigésimo séptimo: Que así las cosas, no verificándose infracción alguna al principio de no contradicción, y encontrándose correctamente contabilizado el plazo de prescripción, así como el cómputo de inicio de la indemnización por lucro cesante, asunto que por lo demás ya se analizó, esta tercera causal de invalidación será de igual modo rechazada.

VII. De la cuarta causal de nulidad interpuesta de manera subsidiaria: Artículo 478 letra c) del Código del Trabajo.

Vigésimo octavo: Que en subsidio, los recurrentes intentan la causal del artículo 478 literal c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior.

Refieren que, sin perjuicio de la falta de conclusiones fácticas que contiene la sentencia que se recurre, el Tribunal debió calificar jurídicamente diferente la fecha del diagnóstico de la enfermedad que origina a la demanda y, por ende, haber acogido excepción de prescripción interpuesta por su parte.

Expresan que la sentencia estableció como ciertos los siguientes hechos: a) Que la primera vez que se detectó la enfermedad que da origen al juicio ocurrió el año 2001 y; b) Que la última fecha en que la incapacidad varió fue el año 2021.



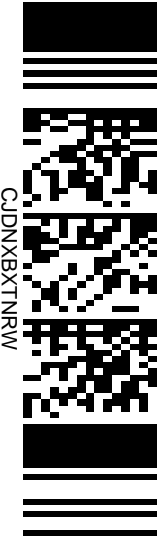
Luego, determinados dichos hechos, para efectos de aplicar el plazo de prescripción de 15 años del artículo 79 de la Ley N° 16.744, el considerando sexto del fallo discurre sobre qué es lo que debe ser calificado como “diagnóstico” para dichos efectos, haciendo presente los recurrentes que lo que se entienda por diagnóstico constituye una calificación jurídica.

Agregan que el propio considerando sexto señala que “la decisión de este punto pasa por dilucidar qué es un diagnóstico”, para lo cual la sentencia se vale de las reglas de interpretación de los artículos 19 y siguientes del Código Civil, tratándose, por tanto, de una dilucidación, esto es, el vaciamiento de hechos determinados, en una figura jurídica que produce efectos en el asunto que se resuelve; una calificación jurídica como valoración.

Sostienen enseguida que la propia sentencia señala que “si por diagnóstico comprendemos únicamente la fecha en que por primera vez se detectó la enfermedad (lo que en este caso ocurrió en 2001), diríamos que de todos modos la acción está prescrita. Si, por el contrario, consideramos la última fecha en que la discapacidad varió (lo que ocurrió en 2021), diremos que la acción no se encuentra prescrita”. Así, la calificación jurídica debe ser entendida como la subsunción y aplicación de la ley a un caso concreto, pudiendo diferenciarse en ella la «calificación jurídica propiamente dicha» y la «calificación jurídica como valoración», materia que desarrolla en su recurso.

Refieren entonces que estamos frente a una calificación con doble implicancia: la calificación sobre lo que debe entenderse por diagnóstico conlleva, a su vez, la calificación sobre la prescripción o no de la acción, y explican que el considerando sexto de la sentencia termina por calificar como diagnóstico, la última fecha en que la incapacidad varió, en el año 2021, concluyendo, por ende, que la acción no se encontraba prescrita, lo que es un error del tribunal ya que para efectos de la prescripción de la acción de autos, debió considerar como fecha del diagnóstico la fecha en que se diagnosticó la enfermedad y, por lo tanto, considerar que la acción se encontraba prescrita.

Indican que el artículo 79 de la Ley N° 16.744 dispone que las acciones para reclamar las prestaciones por enfermedades profesionales prescribirán



en el término de cinco años contado desde la fecha del diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la neumoconiosis el plazo de prescripción será de quince años, contado desde que fue diagnosticada.

Explican que la palabra diagnóstico en medicina se define, según la RAE, como “determinar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos”, que es justamente lo que se hizo en el año 2001. A riesgo de ser majaderos, manifiestan quienes recurren que el diagnóstico constituye la constatación de la existencia de la enfermedad profesional, lo que en la especie ocurrió

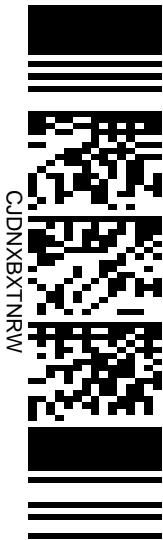
en el año 2001, en tanto lo que ocurrió el año 2021, no correspondió a determinar la existencia de la silicosis, sino más bien su intensidad y gravedad, insistiendo que lo que se revaluó en dicha época no fue el diagnóstico de la enfermedad, sino la incapacidad que ésta generaba.

En base a dicha definición, y a los mismos artículos 19 y siguientes del Código Civil de que se vale la sentencia recurrida, la calificación del tribunal de instancia es errada, debiendo haber calificado como “diagnóstico” la primera vez que la enfermedad fue diagnosticada. Asimismo, siguiendo dicha calificación, la acción interpuesta debió considerarse prescrita.

Señalan que lo anterior, influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo pues, de haberse calificado correctamente la fecha del diagnóstico de la enfermedad, se habría acogido la excepción de prescripción que opuso su parte.

VIII. Análisis de la cuarta causal de nulidad (subsidiaria).

Vigésimo noveno: Que respecto a esta causal, cabe recordar que el legislador exige mantener inmutables “las conclusiones fácticas del tribunal inferior”, restricción que deben respetar tanto la recurrente en sus planteamientos como este Tribunal de nulidad, al momento de analizar la procedencia de alterar la calificación jurídica que se hubiere asignado a los hechos que se tuvo por probados. Por tanto, la impugnación y la correspondiente revisión han de realizarse respetando tales hechos, sin poderse agregar conclusiones fácticas diversas de las fijadas y sin que pueda prescindirse tampoco de las que fueran determinadas en el fallo.



Trigésimo: Que lo que se reprocha por los recurrentes es la calificación del término “diagnóstico” que hace la magistratura. Al entender de aquellos, dicho concepto alude a la primera vez que la enfermedad fue diagnosticada y no a la revaluaciones posteriores, por lo que al haberse diagnosticado la silicosis del trabajador en el año 2001, por lo que al tiempo de deducirse la demanda, la acción intentada estaba prescrita.

Trigésimo primero: Que para resolver el asunto basta con recordar lo señalado al analizar la causal anterior, y especialmente, la jurisprudencia de unificación de la Excma. Corte Suprema expresada en los autos 2661-2015, citada en este fallo, donde se plasma precisamente la interpretación que la judicatura a quo dio a la palabra “diagnóstico”, en cuanto corresponde a la última reevaluación del actor, decisión que es plenamente compartida por esta Corte.

Trigésimo segundo: Que cabe hacer presente, además, que este Tribunal de Alzada ya sostuvo la misma postura en sentencias dictadas en autos Rol N° 9-2020 y Rol N° 140-2019, señalando en este último caso *“Que con todo, el citado artículo 79 de la Ley 16.744, fija el principio de la prescripción de la acción reparatoria por enfermedad profesional y específicamente por neumoconiosis, estableciendo dicho evento en el momento del diagnóstico de la enfermedad. Sin embargo, la mencionada ley no define que debe entenderse por “diagnóstico”, ni entrega los elementos para precisar su contenido. De manera que, dependiendo el sentido de la palabra “diagnóstico” de factores ajenos a la constatación inexperta, deberá atribuírsele el sentido que se le asigna por los expertos del área de salud conforme a lo preceptuado en el artículo 21 del Código Civil.*

Entonces resultará pertinente aproximarnos a su conceptualización mediante el empleo del diccionario de la lengua española, el que permite saber que por él se atiende al “arte o acto de conocer la naturaleza de una enfermedad mediante la observación de sus síntomas y signos”, como también otra acepción nos da cuenta que por ella se hace referencia a la: “calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte”. A su turno, la voz “calificar” permite: “apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo”.

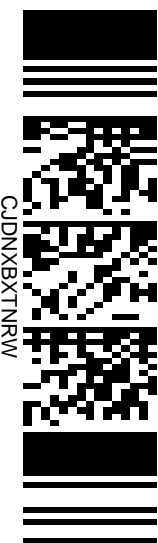


12°) Que la determinación del padecimiento de cierta enfermedad profesional puede ser precisado con mayor o menor extensión temporal, dependiendo de la realización de exámenes cuya complejidad dependa de factores externos, tales como, estudios radiológicos, exámenes de sangre, biopsias, etcétera, por lo que el resultado que de ellos emanará, necesariamente deberá pasar por el cedazo del especialista que, efectuando la labor de análisis que le competa, emitirá su dictamen o diagnóstico acerca del tipo de enfermedad detectada, acto conclusivo al que parece atender el citado artículo 79 para echar a correr la contabilización del plazo prescriptivo no obstante, no podrá desatenderse la circunstancia que la idea que emana de la voz “diagnóstico” también considera la evaluación constante de las condiciones de salud del enfermo, que permitan entender la ratificación del dictamen anterior o su modificación hacia el restablecimiento, o hacia el agravamiento de la situación sanitaria.

13°) Que la idea de observación constante a través del tiempo de la situación de salud del beneficiario queda de manifiesto en la definición de la mencionada palabra, la que unida a la falta de determinación legal de la citada expresión en la Ley 16.744, y a la reiterada cita en ella de conceptos como: declaración, evaluación, reevaluación y revisión de incapacidades, en los artículos 58 y siguientes de la mencionada ley, permite entender que la palabra diagnóstico no resulta unívoca.

Por lo anterior, inicialmente no se puede identificar necesariamente la voz “diagnóstico” con ninguna de las expresiones antes señaladas, sino que en realidad con todas ellas. Entonces, como fue expuesto en la motivación décimo segunda precedente, el sentido de la palabra “diagnóstico” gira en torno a la calificación médica de cierta patología cuya precisión se encuentra mediada por la realización de exámenes y la observación continua de su desarrollo.

En otras palabras, la voz “diagnóstico”, si bien se encuentra asociada a la idea de determinación del padecimiento de salud por evaluaciones médicas, también va acompañada del sentido de seguimiento de la enfermedad, entre otras razones, para modificar el estado y las prestaciones



CJDNXBXTNRW

a que el beneficiario tenga derecho dentro del marco del seguro previsto en la mencionada Ley 16.744.

14°) Que así las cosas, es posible decir que las descripciones a que hace alusión la citada ley en sus artículos 58 y siguientes, cuando habla de la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las incapacidades a que se encuentran sujetos los beneficiarios del sistema de seguro social que establece, vendrán acompañadas de un diagnóstico o de varios de ellos generados a través del tiempo, que den cuenta de la evolución del mal de salud de que se trate, confiriendo bajo este prisma a la voz “diagnóstico” un sentido acorde con su definición, esto es, reconociéndole, en principio, una doble función, determinar la enfermedad detectada en el paciente y, por otro lado, dar cuenta de su progresión o cambio a través del tiempo” (Corte de Apelaciones de Copiapó, sentencia Rol N° 140-2019).

Trigésimo tercero: Que de tal manera, la acción interpuesta por el actor en contra de su ex empleador, por el daño sufrido por concepto de lucro cesante, efectuada sobre la base de la Resolución N°211, de la COMPIN de Atacama, de 9 de febrero de 2018, se encuentra sostenida en un diagnóstico, el que si bien, puede no ser el primero que se haya efectuado al paciente, existe al momento de dictarse la citada resolución administrativa y a su vez la funda, dando cuenta del incremento del factor de incapacidad del mismo, cumpliéndose de esta forma con la exigencia del diagnóstico requerido en el artículo 79 de la Ley N°16.744, de lo que se sigue que, contado el plazo de prescripción a partir de la data de la referida Resolución N°211, no transcurrieron los quince años exigidos por la ley para privar de valor a la acción resarcitoria en estudio, por lo que no se ha verificado en caso alguno la incorrecta calificación jurídica que reprochan los recurrentes.

Trigésimo cuarto: Que conforme a todo lo razonado precedentemente, el presente recurso será rechazado en su integridad, sin condenarse en costas a la parte demandada, por haber tenido motivo plausible para litigar.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 477, 478, 479 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA, sin costas**, el recurso de nulidad deducido por don Sergio Montes Larraín y don Rafael Vargas Valdés,



abogados, en contra de la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintidós, dictada por doña Diana Marín Castañeda, en su calidad de Jueza del Juzgado de Letras de Diego de Almagro, rectificada con fecha dos de agosto del mismo año, sentencia que es **NO ES NULA**.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción de la Ministra señora Aída Inés Osses Herrera.

RIT O-32-2021.

Rol Corte 162-2022.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Copiapó integrada por los Ministros (as) Pablo Bernardo Krumm D., Aida Osses H. y Ministro Suplente Rodrigo Miguel Cid M. Copiapo, veinte de octubre de dos mil veintidós.

En Copiapo, a veinte de octubre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

